



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Gustavo de Jesús Calle Giraldo sucedido procesalmente por María José Agudelo Uribe
DEMANDADOS	Institución Universitaria Salazar y Herrera Liceo Salazar y Herrera
VINCULADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05-005-2017-00510
TEMA	Relación laboral
DECISIÓN	Confirma sentencia

El veinticuatro (24) de junio de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el ACTA **160** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por **GUSTAVO DE JESÚS CALLE GIRALDO** sucedido procesalmente por **MARÍA JOSÉ AGUDELO URIBE** contra la **INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA** y el **LICEO SALAZAR Y HERRERA**, y como vinculado la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-**, radicado **05-001-31-05-005-2017-00510**.

• **RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA:**

En los términos de la sustitución de poder conferida por el doctor **FABIO ANDRÉS VALLEJO CHANCI**, en calidad de apoderado judicial para procesos de Colpensiones de la firma **PALACIO CONSULTORES S.A.S**, de conformidad con el artículo 75 del Código General del Proceso, el despacho le reconoce personería suficiente para actuar a la doctora **SANDRA MILENA NARANJO SALAZAR**, identificada con cédula de ciudadanía 39.175.420 y portadora de la tarjeta profesional 225.677 del Consejo Superior de la Judicatura, para que continúe la representación judicial de la entidad hasta su culminación en el presente proceso judicial.

• **PRETENSIONES:**

Aspira el demandante se declare que con las demandadas existió un solo contrato de trabajo entre el 6 de septiembre de 1985 y el 14 de septiembre de 2015. Que el LICEO SALAZAR Y HERRERA fundó la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA en abril de 1997 y dispuso en los estatutos que el Representante Legal y Rector del LICEO SALAZAR HERRERA fuera simultáneamente Representante Legal de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR HERRERA, entidades que se comportaron simultáneamente, como un sólo empleador con el actor hasta la fecha del despido. Que el contrato de trabajo terminó de facto, de manera unilateral y sin justa causa por decisión de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA y del LICEO SALAZAR Y HERRERA, al nombrar al sacerdote JORGE IVÁN RAMÍREZ AGUIRRE, para que ejerciera las funciones de Representante Legal y Rector, de ambas instituciones accionadas, despojando al actor de sus obligaciones laborales y sometiéndolo al escarnio público. Como consecuencia, sean condenadas de manera solidaria por la indemnización por despido sin justa causa y de manera ilegal, debidamente indexada. A los perjuicios extrapatrimoniales en la modalidad de perjuicios morales y daño a la vida de relación. Al pago de los aportes a la seguridad social. A pagar el valor de la bonificación ordenada por el Consejo de Dirección al momento de la terminación del contrato de trabajo, como elemento o factor de salario con todos los efectos legales, indemnización moratoria hasta cuando las accionadas acrediten el pago de los aportes a la seguridad social con posterioridad a la sentencia que ponga fin al proceso. Que el salario debe estar integrado por los siguientes factores: un salario básico mensual, con variación anual; una prima anual de antigüedad, cancelada en el mes de diciembre, de manera habitual y general, desde 1995 hasta la fecha de terminación del contrato; una suma básica mensual desde enero de 2010 hasta la fecha del despido, denominada ayuda estudiantil, superior siempre al salario básico mensual; el pago a COOMEVA de una prima mensual para gozar de medicina prepagada, desde enero de 2010 hasta la fecha del despido; los impuestos anuales de rodamiento de un vehículo de propiedad del actor, desde el año de 2014 hasta la fecha del despido; la cancelación anual de la póliza de responsabilidad civil para amparar el vehículo de propiedad del actor, desde

el año 2010; el servicio de un empleado de las accionadas para conducir un vehículo de propiedad del actor al igual que el institucional y para acompañarlo, durante todos los días de la semana y los días dominicales y festivos, desde el año 2010, hasta la fecha del despido; por el valor de suministro de gasolina semanal para uso en su vehículo particular; por el valor del pago de la prima de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, para asegurar su vehículo de uso personal; el valor del salario y prestaciones que devengaba un conductor asignado para conducir el vehículo personal del demandante; el valor de la bonificación ordenada por el Consejo de Dirección al momento de la terminación del contrato de trabajo. Que con el salario promedio devengado deben reliquidarse y pagarse los siguientes derechos del demandante: la prima semestral de servicios desde que se causó el derecho y hasta la fecha del despido; el auxilio de cesantía causado a diciembre 31 de cada anualidad desde que se causó el derecho y hasta el 31 de diciembre de 2014 y el auxilio definitivo de cesantía. Que, sobre el nuevo valor del auxilio de cesantía, se debe reliquidar el reajuste de los intereses al auxilio de cesantía, ahora doblado por la mora. Las vacaciones causadas y pagadas desde que se causó el derecho, hasta la fecha del despido, ahora compensadas en dinero. Pagar a título de indemnización de perjuicios, el valor de los reajustes mensuales de las mesadas pensionales y de las mesadas 14 que no cancele COLPENSIONES, debido al fenómeno de la prescripción. La indemnización por mora por no pagar a la terminación del contrato de trabajo la bonificación decretada por el Consejo de Dirección desde el 2010. Costas y agencias en derecho.

- **HECHOS:**

Como fundamento de las pretensiones manifestó que las demandadas son entidades constituidas legalmente, dedicadas a la actividad mercantil de la educación primaria, secundaria y universitaria, que conforman dos entes jurídicos de forma nominal pero que, frente al actor, se comportaron como un solo empleador, debido a que la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA es propiedad del LICEO SALAZAR Y HERRERA. Que celebró contrato de trabajo a término indefinido; en forma verbal con el LICEO SALAZAR Y HERRERA. Que en abril de 1997 esta entidad fundó la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, en la cual como Rector del LICEO SALAZAR Y HERRERA debía ser simultáneamente el Rector y Representante Legal de ambas instituciones.

Que prestó sus servicios personales desde el 6 de septiembre de 1987 de hasta el día 24 de septiembre de 2015, de manera exclusiva, diaria, continua y sucesiva, en dichas instituciones en las instalaciones de cada de ellas, de acuerdo con la necesidad, en la ciudad de Medellín. Que como rector estaba subordinado al señor arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín, quien era la máxima autoridad de la Institución y al Consejo Directivo. Que correspondía al Consejo Directivo, entre sus funciones, legislar sobre las políticas generales de la Institución Universitaria y ser la última instancia en las decisiones de los procesos administrativos, darse su propio reglamento, aprobar o improbar el presupuesto semestral de rentas y gastos presupuesto por la rectoría. Que las decisiones del Rector tenían segunda instancia y las del Consejo Directivo solo tenía el recurso de reposición. Que estaba subordinado al Señor arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín quien era la máxima autoridad de la Institución y al Consejo de Dirección, donde se determina que es la máxima autoridad colegiada. Narró algunas funciones del Consejo Directivo del LICEO SALAZAR Y HERRERA. Que este Consejo, por convocatoria del señor Rector, acordó en una de sus sesiones ordinarias del año 2010 que el LICEO le otorgaba al señor actor al momento de terminar su contrato de trabajo una bonificación de \$190.000.000 y una renta vitalicia por los servicios prestados a las accionadas, valor que no ha sido pagado. Que el contrato de trabajo terminó de facto el 14 de septiembre de 2015, de manera unilateral y sin justa. Que no le fueron pagados en algunos períodos los aportes para la seguridad social en pensión, salud y parafiscales. Que algunos aportes a la seguridad social fueron pagados con un salario básico inferior al que correspondía. Que a la terminación del contrato de trabajo no remitieron dentro del término legal al demandante, los comprobantes de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales. Que la remuneración estaba integrada por un salario básico mensual, con variación anual; una prima anual de antigüedad, cancelada en el mes de diciembre, de manera habitual y general, desde 1995 hasta la fecha de terminación del contrato; una suma básica mensual desde enero de 2010 hasta la fecha del despido, denominada ayuda estudiantil, superior siempre al salario básico mensual; que la accionada no certificó el pago de ayuda estudiantil por los meses de junio, agosto y diciembre de 2011 ni noviembre de 2014), pero el actor afirma que se la cancelaron; el pago a COOMEVA de una prima mensual para gozar de medicina prepagada, desde enero de 2010 hasta la fecha del despido; los impuestos anuales de rodamiento de un vehículo de propiedad del actor, desde el año de 2014 hasta la fecha del

despido; la cancelación anual de la póliza de responsabilidad civil para amparar el vehículo de propiedad del actor, desde el año 2010; el servicio de un empleado de las accionadas para conducir un vehículo de propiedad del actor al igual que el institucional y para acompañarlo, durante todos los días de la semana y los días dominicales y festivos, desde el año 2010, hasta la fecha de del despido; por el valor de suministro de gasolina semanal para uso en su vehículo particular; por el valor del pago de la prima de la póliza de responsabilidad civil extracontractual para asegurar su vehículo de uso personal; el valor del salario y prestaciones que devengaba un conductor asignado para conducir el vehículo personal del demandante; el valor de la bonificación ordenada por el Consejo de Dirección al momento de la terminación del contrato de trabajo. Que estas remuneraciones se las pagaron siempre en forma puntal, la mayoría de las veces, por el LICEO SALAZAR Y HERRERA y otras por la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA LICEO SALAZAR Y HERRERA., salvo la bonificación. Que pertenecía al régimen de cesantías establecido en la Ley 50 de 1990 y sus cesantías eran depositadas en el fondo COLFONDOS. Que en los estatutos del LICEO SALAZAR Y HERRERA, se establece una norma ineficaz para el actor, al tener celebrado un contrato de trabajo a término indefinido y que consiste en establecer que el Rector "es de libre nombramiento y remoción". Que se le realizó cierta liquidación definitiva, excluyendo derechos ciertos de salario y no pagando los derechos causados como una bonificación establecida por el Consejo de Dirección al momento de la terminación del contrato. Que en su jornada de trabajo diaria no tenía una misión evangelizadora específica. Que el suplente del rector no era sacerdote y fue nombrado por el arzobispo, que las instituciones accionadas contaban siempre con un capellán que no era el actor. Hizo alusión a las carreras universitarias con las que contaba la institución. Que las accionadas no funcionan como seminario o comunidad religiosa o dedicación al culto. Narró más funciones del rector, como la de dirigir la estructura administrativa. Que el Consejo Directivo del 29 de octubre de 2010 acordó por la prestación de sus servicios pagarle la suma de 300 salarios mínimos legales mensuales, al su retiro. Que su sueldo y las diferentes remuneraciones estaban incluidas en el presupuesto de rentas y gastos anuales de las instituciones, era aprobado y se debía ejecutar de manera íntegra.

- **CONTESTACIONES:**

Colpensiones: Se adhirió a las pretensiones relativas al pago de aportes a la seguridad social durante la vigencia de la relación laboral. Se opuso a las demás pretensiones. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación de recibir los aportes la seguridad hasta tanto se acredite judicialmente la existencia de una relación laboral con los extremos temporales exactos y se cancelen los respectivos intereses moratorios o el cálculo actuarial a favor de la demandada, inexistencia de responsabilidad de Colpensiones frente al no pago de los aportes a la seguridad social, inexistencia de la obligación de reliquidar la pensión de vejez del demandante, incluyendo la primera y las 14 mesadas, inexistencia de la obligación de reconocer intereses de mora, falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad, buena fe, prescripción, imposibilidad de condena en costas a Colpensiones y la excepción genérica

Institución Universitaria Salazar y Herrera y el Liceo Salazar y Herrera: se opusieron a la totalidad de las pretensiones incoadas en su contra al señalar que entre las partes no rigió un contrato de trabajo, toda vez que entre ellos se dio una relación de obediencia entre una iglesia como es la católica a través del señor arzobispo de la Arquidiócesis de Medellín y un sacerdote que pertenece a dicha orden y que se le encomienda un oficio eclesiástico. Como excepciones de fondo propuso las que denominó: prescripción extintiva, inexistencia de la obligación, compensación, buena fe, pago, falta de legitimación en la causa por pasiva.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 24 de mayo de 2019, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín absolvió a las demandadas de la totalidad de las súplicas de la demanda, al considerar que no existió entre las partes un contrato de trabajo, toda vez que el demandante prestó sus servicios conforme a sus convicciones religiosas, amparado en el concordato suscrito entre la Santa Sede y el Gobierno Colombiano. Que debido a la labor evangelizadora del demandante, no hay lugar a la presunción de que trata el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Las costas procesales las impuso a cargo del demandante, quien fue sucedido procesalmente por María José Agudelo Uribe.

- **APELACIÓN:**

La decisión anterior fue recurrida en apelación por el demandante, quien a través de su mandatario judicial la sustentó en los siguientes términos:

“... es equivocado que se dé por establecido los estatutos que regían en 1985 cuando Monseñor se vinculó a la institución, los estatutos que hay en el proceso son los aprobados por la resolución 0309 del 12 de marzo de 1993, de modo que no puede partir de ninguna manera que esos estatutos eran los vigentes cuando él se vinculó. En la sentencia no se valora en debida forma el interrogatorio de parte, los testimonios y la prueba documental, y se dejan muchos espacios que desfavorece el derecho sustancial que pretende el demandante. La demanda fue presentada por Monseñor Calle Giraldo, y al fallecer, vino una legataria, es decir, ella viene por derecho propio, por ministerio de la Ley y no como demandante. Le parece equivocada la providencia desde el punto de vista constitucional, pues la constitución en el preámbulo determina el Estado Social de Derecho, la justicia, la equidad, establece el derecho del trabajo, y la sentencia que se acaba de proferir dirige a la ignominia al sacerdote que le prestó servicios a una comunidad que tenía más de 700 trabajadores y más de 7 mil estudiantes. No podemos decir que esa actividad diaria que realizaba el sacerdote era eminentemente espiritual, que era una actividad gratuita. Dentro del proceso no aparece ninguna prueba de que alguna comunidad o la arquidiócesis le suministraran estipendios, todo lo contrario, aparece probado con certeza documental y científica la prueba del pago del salario, prestaciones y seguridad sociales. Entonces, tenemos que estudiar en qué consiste el objeto y la causa del contrato de trabajo tanto para el empleador como para el trabajador. El objeto del contrato de trabajo para el trabajador consiste en buscar que con la compensación pueda suplir su vida diaria, la cual está probada que no se la pagaba ninguna comunidad, pues el sacerdote no pertenecía a ninguna comunidad, diferente a un párroco de una parroquia y la sentencia que cita el juez no tiene relación con la situación de este proceso, pues esta se refiere a situaciones diferentes. El juez no valoró la respuesta ni la pregunta primera del interrogatorio de parte, donde se le preguntó al representante legal que dijera cómo es cierto sí o no que Monseñor Gustavo Calle desempeñó las funciones de rector y cómo se relaciona en el certificado de existencia y representación legal; si nos detenemos en la confesión que él hace de que es cierto, y venimos al documento del folio 50, donde dice mantener la disciplina, el orden moral y la religiosidad de profesores y alumnos, elaborar anualmente el presupuesto de rentas y gastos, presentarlos a la junta directiva para su estudio y aprobación y autorizar su ejecución, administrar económicamente los bienes del liceo, entre otros, que dan los recursos necesarios, siempre de acuerdo con la junta directiva de este, de la lectura de este documento de folio 50 se establece según esa confesión, la subordinación. Indica que la providencia está equivocada en lo que se denomina estructuralmente como la subordinación, porque la subordinación jurídica no es el obedecimiento de órdenes, sino la facultad, la disposición de recibir las órdenes que se le pueda dar. En los estatutos está cómo es la subordinación a ese nivel y es qué la subordinación no puede ser manera para una persona, como lo es el rector de la universidad demandada. Indica que le llama mucho la atención que en la providencia no se analice el contenido mismo y profundo y científico de la Resolución 08 de septiembre 6 de 1985, sirve inclusive para descalificar el testimonio de la revisora fiscal y del revisor fiscal, en el cual dicen que no tenían como una referencia concreta y precisa de ese documento. El literal d) dice que el nombramiento del rector corresponde

única y exclusivamente a esa junta, como consta en el literal a) del artículo 13 de los estatutos que rigen a la institución. Lo que pasa es que esos estatutos a los que se refiere esa resolución no están en el proceso, por ello, no puede suponer en la providencia algo que no está y que es sustancial. En el literal e) dice que en la reunión efectuada para la elección del rector en propiedad asistieron todos los miembros de la junta y se siguieron los pasos indicados para ello según consta en el acta 6 de septiembre de 1985, entonces, no se puede decir que Juan David tenía un interés personal de proteger a su hija, pues ese dicho de la providencia en relación con esto se contradice, y ahí existe una diferencia profunda en la decisión de la providencia. Además, si se valoran los estatutos mismos que están en el proceso y que fueron aportados por la parte demandante y la parte demandada, por ejemplo, se hizo una indagación de por qué había diferencias en el art. 17 y eso se quedó en la nebulosa. Entonces, esos estatutos que sirvieron de base al juez de primera instancia para absolver, cuando no existe la coincidencia entre lo que certifica la Gobernación de Antioquia como entidad gubernamental y lo aportado de internet que tanto la parte actora como la parte accionada presentaron, no son los estatutos y eso es una equivocación grave de la providencia.

De otro lado, algunos decían en los testimonios que los Estatutos los manejaba Monseñor como él quisiera y eso es absolutamente falso. En el art. 34 dice que toda reforma de los Estatutos generales deberá ser aprobada por el Consejo de Dirección en dos debates por lo menos con los votos de las 2/3 partes sus miembros. Las reformas a los estatutos generales deben ser aprobadas por el arzobispo de Medellín y sometido a las normas canónicas y civiles pertinentes. Los presentes Estatutos fueron aprobados mediante reunión celebrada el 25 de abril de 1990, según consta en el acta 3 del libro de actas del Liceo Salazar y Herrera; entonces, allí está la prueba de que Monseñor no tiene las calidades de manejo y abuso del poder que la parte actora le ha endilgado en la contestación de la demanda y en sus alegaciones. Lo que se ha dado es un abuso de la palabra para endilgarle responsabilidad y oponerse a la declaración de la existencia del contrato de trabajo.

El señor Renato le mintió al despacho cuando dijo que no asistió a la reunión del acta 1 de 2010. Invita a las autoridades a leer el acta, y allí consta que él asistió. Es grave que se admita como testimonio a una persona que miente en el proceso y tiene mala fe.

Reitera que, en su criterio, las sentencias que citó el juez de instancia como la 5638 de 1993, se refieren es a cuando el sacerdote tiene votos de pobreza y en este caso no los hay, pues él recibía salario, la ayuda estudiantil, se le pagaba la gasolina, la medicina prepagada, el salario, la seguridad social, para sus gastos personales. Los votos de pobreza son para aquellas comunidades que después recogen a sus sacerdotes que tiene deber de obediencia y luego los llevan a un asilo, pero en este caso se recibió pensión por parte de Colpensiones y él recibía el salario que le correspondía. El salario es cualquier remuneración o denominación que se le diera a la remuneración que se le daba al trabajador por el salario. Indica que la ayuda estudiantil de la que hablan es un disfraz. Dice que a Monseñor se le endilga la responsabilidad de que tenía que pagar los aportes a la seguridad social, pero no es así, los tenía que pagar la institución. No se puede decir que el abandono que el arzobispo hizo y sus estamentos del Liceo Salazar y Herrera, y le endilgaron la responsabilidad a él, obligándolo como persona a estar verificando los aportes a la seguridad social, pero los aportes a la seguridad social le corresponden es al empleador. Es sumamente extraño que después que en el acta 01 de 2010, se le reconozca la bonificación por sus servicios prestados y después se diga que se revocó y que no hay consecuencia que los deba pagar. Suponiendo que el pago de esa bonificación fue un acto unilateral del Consejo de Administración, es que el Dr. Juan David era el suplente del rector, y el señor Nicolás también, de acuerdo con los Estatutos también era el suplente, y ellos como autoridad se reunieron por derecho propio y aprobaron la bonificación, por lo cual esta

se le debe con el carácter salarial, además de todos los otros elementos que están en el art. 19. La sentencia del 18 de mayo de 2016 de la CSJ con Radicado 47048 dice que esta corporación reiteradamente ha puntualizado que la sanción moratoria prevista en el art. 65 y 99 procede cuando el empleador no aporta razones satisfactorias y justificativas para su conducta. Para esto se ha dicho que el juez debe adelantar un examen riguroso del comportamiento que asumió el empleador en su condición de deudor moroso y en la globalidad. De igual modo se ha estimado que la buena o mala fe no depende de la prueba formal de los convenios o de la simple afirmación del demandado de que creer que está actuando conforme a derecho, pues en todo caso es indispensable la verificación de otros aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado. Vale decir que el juez debe contemplar las pruebas, para explorar en ellas otros argumentos que sirvan para abstenerse a imponer la sanción. Se ha inclinado más adelante por una interpretación de la cual la verificación de la conducta del empleador es un aspecto que debe ser revisado en concreto de acuerdo a todos los detalles y peculiaridades que aparezcan probados en el expediente, pues no hay razones absolutas que determinen que un empleador actuó de buena o mala fe y exige la revisión completa de todos los elementos del caso.

Si se observa bien la declaración de todos los testigos, se puede concluir que la empresa en ninguna manera presentó razonadamente los argumentos por los cuales no incluyó esas prestaciones sociales como el auxilio de escolaridad y demás para liquidar las prestaciones sociales. Por ello, no solo se deben aplicar como factor de salario, sino que también se debe aplicar la sanción moratoria como lo establece la ley.

El Liceo Salazar y Herrera y la Universidad son instituciones de carácter mercantil porque está probado que había más cosas de la educación, se hacían préstamos a particulares y eso es ajeno a una institución educativa. Están son establecimientos de comercio al amparo de la arquidiócesis de Medellín y no quiere decir que los sacerdotes que no están dedicados al culto tengan la obligación de dedicarse a otros negocios simplemente por ser un oficio religioso, el cual no es en este caso el prestar dineros, tener un hotel, un almacén, controlar la disciplina de 700 empleados. Si bien Monseñor hacía algunas actividades religiosas, esa no era la esencia. La sentencia SU 540 tampoco coincide con el aspecto fáctico de este proceso, al igual que la sentencia de Radicado 52272. Frente a la valoración de las pruebas indica que no lo hizo de una manera científica. No comparte que se haya declarado la tacha en contra de Juan David Agudelo, él fue llamado por Monseñor Calle Giraldo y María José simplemente fue un accidente porque él se murió; entonces, ¿si Monseñor estuviera vivo, el testimonio de Juan David también levantaría sospecha? Él dijo sobre el acta lo que recordaba, pero eso no quiere decir que la interpretó. Indica que el Monseñor no tenía un cargo eclesiástico, diferente al nombramiento de quién reemplazó a Monseñor, persona la cual si fue establecida por decreto de la arquidiócesis. No se ve bien que el señor Gustavo Calle solicite se le hagan los reajustes a la seguridad social. Solicita se revoque la sentencia en costas pues este no es el momento oportuno para condenar en costas y María José no es demandante, pues ella solo vino a sustituir en la demanda como un derecho que le confiere la ley, pero no es demandante. En caso de que decreten las costas, están deben ser en una cuantía inferior. Solicita se revoque la sentencia en su totalidad y se acceda a las pretensiones de la demanda”

- **ALEGATOS:**

Demandante: Solicitó la revocatoria íntegra de la sentencia de instancia y en su lugar se acceda a la totalidad de las pretensiones. Argumento estos en

conceptos similares a los expuestos con la demanda y la sustentación del recurso de apelación. Inició su exposición haciendo alusión al artículo 61 Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social relacionada con la libre formación del convencimiento, señalando que las codemandadas no probaron de manera solemne que el demandante haya adquirido el estatus de sacerdote de la iglesia católica, ni que el oficio que desempeñó de representante legal y rector haya sido un oficio religioso, ni que en los estatutos de las codemandadas esté establecido como requisito esencial que para desempeñar tales cargos se requiera tener la calidad de sacerdote de la iglesia católica, como un requisito sine qua non, ni que fuera miembro de cierta comunidad religiosa y que dentro de los estatutos de dicha entidad se tengan obligaciones laborales como oficio, que debe desempeñarse gratuitamente y que lo que reciba deba entregarlo a la comunidad. Indica que no es posible juzgar esta causa a la luz del concordato suscrito entre la Santa Sede y el Gobierno Colombiano. Hizo alusión a los estatutos registrados por el Liceo Salazar y Herrera en la Gobernación de Antioquia, e hizo reparo frente a ellos y las consecuencias que generaron. Aludió a los orígenes y conformación de las instituciones demandadas. Que no hay duda de que el demandante estaba unido con las demandadas a través de un verdadero contrato de trabajo de conformidad en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Que fue despedido sin justificación alguna. Que se deben reajustar los aportes a pensión. Acusó a las demandadas de obrar de mala fe, al señalar que estas no presentaron justificación alguna al haber establecido en el interrogatorio de parte que los estatutos con que se había trabado la litis no son los oficiales y auténticos, sobre los cuales guardaron silencio, concluyendo que no colaboraron con la administración de justicia. También hizo mención a algunos apartes de las audiencias orales en las que, a su juicio, las demandadas se encuentran comprometidas.

Colpensiones: *“Frente a los hechos acá debatidos tenemos que la entidad demandante el instituto Salazar y Herrera logro desvirtuar la existencia de una relación laboral y se absolvió a todas las parte incluida la entidad a la cual represento de todas las pretensiones incoadas en su contra, teniendo como argumentos que la calidad de sacerdote del demandante no lo hacía presumir de una relación laboral porque la actividad desarrollada por este fue bajo una función misional, las labores aca desempeñadas fueron en virtud del deber de obediencia que de este tipo de oficios se predicen tal y como se indicó en las sentencia que a continuación se citan. Corte suprema de justicia radicación 20852 (...) Así las cosas, señores magistrados*

se CONFIRMAR la sentencia del 24 de MAYO de 2019 en la cual se declaró probada la excepción de INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION, pues no se acreditó la existencia de una relación laboral lo que llevo a que no hubiera lugar a reajustar las prestaciones sociales ni reajustar la pensión de vejez que la entidad le venía reconociendo”

Institución Universitaria Salazar y Herrera, Liceo Salazar y Herrera: Que la relación que unió al presbítero demandante y a estas instituciones no fue de índole laboral sino una relación estrictamente basada en un oficio eclesiástico. Que el demandante se abrogó pagos que no le correspondían, constituyéndose en un abuso del derecho. Que “*El padre Gustavo Calle decidió comenzar a cotizar a la seguridad social desde el año 1990, tal y como aparece en la afiliación que el mismo suscribió y con eso dio aplicación al DECRETO 2419 DE 1987 que extiende la cobertura de los Seguros Sociales Obligatorios a los Sacerdotes Diocesanos y a los miembros de las Comunidades Religiosas de la Iglesia Católica que en su artículo establece que se aplica a los Sacerdotes Diocesanos y miembros de las Comunidades Religiosas de la Iglesia Católica, que por no tener contrato de trabajo celebrado con ninguna entidad de derecho público o privado, no son afiliados forzosos al Régimen de los Seguros Sociales Obligatorios*”. En lo que tiene que ver con la regulación de las relaciones entre los clérigos y las comunidades religiosas a las que pertenecen hizo alusión a las sentencias SL9197 de 2017, radicación 51272 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y SU-540 de 2207 de la Corte Constitucional. Añadió que “*Acogiendo los argumentos del fallo de primera instancia se tiene que el acta de la Junta Directiva de 1985 fue ratificada por los testigos en el proceso, quienes aceptan que el rector de la Institución debe ser nombrado por el arzobispo por tratarse de un bien de la Iglesia; Es decir que la existencia de una Junta Directiva y sus actuaciones no relevan la autoridad de la iglesia para nombrar el rector de las instituciones (...) La absolución que se pide para mis representadas se centra en que los votos de obediencia por la orden sacerdotal y el proyecto de vida religioso que asumí y acepto el rector permiten inferir que no existe subordinación entre el demandante y ningún funcionario de las Instituciones, sus votos de obediencia están directamente relacionados con el arzobispo de Medellín. El Único ordenador del gasto como administrador de las instituciones nombrado por la Arquidiócesis era el padre GUSTAVO CALLE GIRALDO, lo que redundo en ausencia de subordinación. No existe vínculo laboral cuando median compromisos, votos de obediencia y parámetros fijados por las ordenes de la comunidad religiosa o iglesia amparados en el concordato.*”

CONSIDERACIONES:

Aspira el demandante se declare que con las demandadas lo unió un verdadero contrato de trabajo, solicitando como consecuencia el pago y reajuste de salarios, prestaciones sociales y demás acreencias laborales legales y extralegales; el juzgado del conocimiento acogió los argumentos de defensa de las demandadas y procedió a absolverlas de la totalidad de las pretensiones al señalar que no existió entre las partes un contrato de trabajo, ya que el actor prestó sus servicios conforme a sus convicciones religiosas.

Indica el demandante que prestó sus servicios personales a las demandadas desde el 6 de septiembre de 1987 hasta el 24 de septiembre de 2015 en calidad de rector y que estaba subordinado al señor arzobispo de la arquidiócesis de Medellín, quien era la máxima autoridad de la institución; de otro lado, las demandadas alegan que si bien monseñor Calle Giraldo prestó sus servicios a las instituciones, no lo hizo bajo ninguna subordinación o dependencia, puesto que su labor se dio en virtud de oficio eclesiástico propio del derecho canónico y del señor demandante de manera omnímoda y sin subordinación, sin cumplimiento de horarios, sin superiores al interior de las mismas ejerció su mandato hasta septiembre de 2015, además que efectivamente se encontraba subordinado al Arzobispo de la arquidiócesis de Medellín, pero nunca a la institución.

Atendiendo a lo anterior, el problema jurídico para resolver por esta Sala del Tribunal se centrará en determinar si entre las partes existió o no una relación laboral regida por un contrato de trabajo.

Para resolver el problema planteado se debe partir de que las partes reconocen que el demandante prestó sus servicios en favor de las demandadas en calidad de rector; sin embargo, el conflicto se genera debido a que la parte actora afirma que la relación se dio en virtud de un verdadero contrato de trabajo, mientras que las demandadas señalan que se dio con ocasión de la calidad religiosa del señor Calle Giraldo.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido pacífica al señalar que cuando la relación laboral se funda en una actividad misional o pastoral, inspirado en los votos de obediencia y pobreza propios de su tarea sacerdotal, no puede enmarcarse dentro de la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, por lo que no

puede considerarse que se estuvo en presencia de un contrato de trabajo. Así se pronunció en sentencia SL2610-2020:

“Sobre este tipo de relaciones entre entidades religiosas o comunidades de tendencia y clérigos, ya la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse, sosteniendo al respecto, que cuando se está frente a una actividad misional o pastoral, en la que se presta un servicio orientado fundamentalmente por la espiritualidad, la fraternidad y gratuidad, e inspirado en los votos de obediencia y pobreza propios de su tarea sacerdotal, no puede enmarcarse dentro de la presunción del artículo 24 del CST, puesto que el móvil de dicha labor tiene un matiz netamente religioso, y por ende, ajeno a cualquier vínculo de carácter laboral o contractual”

En dicha providencia, la Corte también hizo alusión a las sentencias SL9197-2017 y CSJ SL, 27 may. 1993, rad. 5638, en las que llegó a la misma conclusión:

“...en punto de las ordenaciones religiosas, no puede hablarse estrictamente con el tamiz de la presunción del artículo 24 del CST, de una relación laboral entre el clérigo y su superior jerárquico, cuando se está manifestando una actividad misional, pues el primero no es empleado del segundo, sino que actúa en función de su creencia o ideología, nexa que se convertirá en jurídico solo cuando aquel desarrolle una actividad que no esté anclada exclusivamente en su religiosidad o que se encuentre fuera de las disposiciones a las que se adhirió cuando se incorporó a la comunidad, es decir, fuera de las de asistencia religiosa o de culto y otras inherentes a sus compromisos, evento en el que la doctrina laboral los reconoce, pero como «empleadores ideológicos», cuya naturaleza permite el reclamo de derechos, con otro tipo de ponderación de garantías, porque están en juego tanto los derechos fundamentales, como las libertades, aspecto último que, en todo caso, no se encontró identificada en este asunto, como con claridad lo expuso el juzgador, en tanto lo que dedujo fue que Carlos Morales Gaitán ejerció únicamente como Ministro de Culto de la Iglesia demandada y allí prestó su “testimonio con responsabilidad, honestidad, como también con lealtad”.

(...)

Así, las organizaciones de tendencia representan una excepción en el derecho del trabajo cuando (i) tengan como fin esencial la difusión de su creencia e ideología; (ii) posean arraigo cultural y reconocimiento social; (iii) la subordinación se predique hacia la creencia o ideología y no respecto de determinado sujeto; (iv) se exprese a través del concepto de trabajo libre; (v) exista un impulso de gratuidad, de altruismo, soportado en la espiritualidad o en el convencimiento del propósito del trabajo voluntario; todo ello es lo que impide dotar de naturaleza contractual laboral a este tipo de relaciones; en los demás eventos, aunque reconociendo sus particularidades, sí deberán responder laboralmente”

En la sentencia CSJ SL, 4 nov. 2004, rad. 20852, advirtió la Corte en un caso análogo al presente, que la vinculación del demandante se produjo por tratarse dicha institución de uno de los bienes terrenales de la comunidad religiosa a la que pertenecía. Además que su función allí se debió al cumplimiento de la

labor religiosa a que voluntariamente se sometió al hacerse miembro de esa comunidad. Continuó la corporación señalando que las actividades que desempeñó como rector no fue producto de una subordinación laboral, pues la misma se dio por pertenecer a la comunidad con la finalidad de atender sus obligaciones religiosas:

“...no queda duda a la Corte que la vinculación del fraile ALVARO GALVIS RAMIREZ, O.P., a la UNIVERSIDAD SANTO TOMAS se produjo por tratarse dicha institución de uno de los bienes terrenales de la comunidad de dominicos denominada ‘Orden de Frailes Predicadores’ de la Provincia de San Luis Beltrán de Colombia, de la que es indiscutiblemente uno de sus miembros el actor, y su motivación y objetivo no fue otro que el acatamiento del voto de obediencia que profesa y el cumplimiento de la labor religiosa a que voluntariamente se sometió al hacerse miembro de esa comunidad; y que su calidad de Rector y las otras actividades que allí desempeñó, no se concibieron como fruto de una subordinación laboral sino en atención a su pertenencia a la Orden de Predicadores y con la exclusiva finalidad de atender sus obligaciones religiosas, las cuales le era dable ejecutar “bajo cualquier forma”, en el llamado “Ministerio de la palabra”, para lo cual surge la presencia en “las universidades” entre otras, a través de la docencia y administración de dichos bienes, según se ha visto.

[...]

[...] con independencia de los modos, cargos o aún jerarquías en que cumplió la actividad el religioso, es también claro que, su relación con la institución, obra o dependencia directa de la comunidad para la cual prestó el servicio, fue orientada fundamentalmente por la espiritualidad y gratuidad que fluyen de los votos de obediencia y pobreza profesados. Por ende, dichos votos, en casos como el aquí examinado, impiden dotar de naturaleza contractual laboral las actividades educativas que como directivo universitario y docente cumplió dentro de la obra de su propia comunidad religiosa, las cuales, por esos mismos votos, están inspiradas en la voluntad de vínculos de fraternidad, espiritualidad, desprendimiento y entrega, ajenos por completo a los que corresponden al vínculo contractual laboral en donde, se sabe, se encuentra siempre presente un interés personal que se refleja en un activo patrimonial del servidor, una contraprestación económica, siempre con carácter oneroso”

En la citada sentencia SL2610-2020, la Corte Suprema de Justicia también se pronunció acerca de la sentencia SU-540 de 2007 proferida por la Corte Constitucional. En esta última se manifestó que aquellas relaciones que tienen su origen en los compromisos adquiridos con una comunidad religiosa tiene efectos jurídicos distintitos, por lo que no puede ser tratado a la luz del Código Sustantivo del Trabajo para predicar de ella una verdadera relación laboral regida por un contrato de trabajo. Añadió la Corte que la relación se enmarca en el contexto del Concordato celebrado entre el Estado y la Iglesia Católica conforme a las reglas del derecho internacional y que constituyen un ámbito específico mediante el cual se da entrada a las disposiciones propias del Derecho Canónico y de la Orden o Comunidad religiosa que se trate:

“[...] la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia resulta del todo razonable pues ella no se funda en una norma “evidentemente inaplicable”. Así la relación de compromiso mediante votos a una determinada comunidad u orden religiosa está llamada a producir efectos jurídicos en el ámbito específico de esas relaciones; pero el Estado tal como se halla configurado en la Constitución protege y garantiza dichos compromisos que resultan mutuos y recíprocos. Para el caso, como se ha señalado, dicha relaciones se enmarcan en el contexto del Concordato celebrado entre el Estado y la Iglesia Católica conforme a las reglas del derecho internacional y que constituyen un ámbito específico mediante el cual se da entrada a las disposiciones propias del Derecho Canónico y de la Orden o Comunidad religiosa que se trate (para el caso las Constituciones de la Orden de Predicadores).

Va de suyo que los compromisos surgidos de la vinculación y adhesión a una determinada orden, congregación o instituto religioso no pueden resultar atentatorios de la dignidad humana y por ello siempre se han de preservar condiciones que garanticen condiciones de existencia y subsistencia dignas que deben, en todo caso, ser provistas por la respectiva orden, comunidad o instituto religioso como contrapartida de lo que voluntariamente las personas a ellas vinculadas en virtud de votos canónicos aportan para el sostenimiento de las mismas.

[...]

[...] surge con claridad que la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema a partir de la declaración del propio demandante en cuanto a las características de la relación que lo unió a él con la Universidad Santo Tomás dada su condición de fraile dominicano, adscrito o miembro de la Provincia de San Luis Bertrán (folios 94 al 101 cuaderno N° 3), enmarca su solución en el Derecho Canónico y por ello llega a la conclusión desde ese enfoque, de estimar que en el caso en estudio no concurrían los elementos del contrato de trabajo y por ende debía casarse la sentencia del H. Tribunal Superior de Bogotá.

A juicio de esta Corte, esa decisión, en cuanto se fundó en una interpretación válida de normas aplicables y en hechos y elementos probatorios aportados al proceso, inclusive por el propio demandante, es claro, no ameritaba la decisión adoptada por el H. Consejo Superior de la Judicatura.”

Contrario a lo afirmado por el demandante en su apelación, la jurisprudencia citada sí es aplicable al caso concreto, por tratarse de asuntos de similares características al presente caso, como pasa a explicarse a continuación.

Descendiendo al caso concreto, se observa que la intención del demandante es demostrar que el servicio que prestó en favor de las Instituciones Educativas demandadas siempre obedeció a la función que desempeña cualquier trabajador en Colombia y no con ocasión de su condición religiosa; no obstante, contrario a ello, a criterio de esta Sala y al igual que lo concluyó el juzgado del conocimiento, el demandante, monseñor Gustavo de Jesús Calle Giraldo, fue nombrado para ejercer la rectoría de la Institución Universitaria Salazar y Herrera y del Liceo Salazar y Herrera en virtud de su

vocación religiosa y no por tratarse de cualquier particular que puede ejercer el cargo.

Alega el demandante que del contenido de la resolución 08 del 6 de septiembre de 1985¹, se observa que la Junta Directiva del Liceo Salazar y Herrera de Medellín lo nombró como Rector en propiedad, cargo vacante con ocasión de la muerte de quien ocupó tal rectoría por espacio de 33 años, monseñor Damián Ramírez Gómez. En la misma resolución se indica que dicho nombramiento corresponde única y exclusivamente a dicha junta, de conformidad con el literal a del artículo 13 de los Estatutos que rigen la institución.

El demandante también aportó como prueba una serie de pagos que le realizaron las demandadas por concepto de medicina prepagada, ayuda estudiantil, auxilios económicos, la historia laboral donde se observan los aportes a la seguridad social en pensión, entre otros.

De acuerdo con las reglas de la sana crítica, la libre formación del convencimiento y la valoración probatoria de que trata el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, esta Sala tiene la facultad de libre apreciación y ponderación probatoria y con base en ello, inclinarse por los medios demostrativos que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables. (Ver sentencias CSJ SL2049-2018 y CSJ SL1469-2021).

Analizada la prueba en su conjunto se observa que las dos Instituciones Educativas demandadas están bajo la orientación de la arquidiócesis de Medellín, siendo el arzobispo quien ejerce el máximo nivel de dirección de estas tal y como se lee de los Estatutos; si bien los Estatutos que obran en el expediente no son los vigentes para 1985, año en que fue nombrado como Rector el demandante, no se puede desconocer que estos tienen fuerza probatoria, toda vez que entraron a regir a partir de 1990, por lo que estuvieron vigentes durante gran parte de tiempo en que el actor fungió en dicho cargo; no obstante, los testigos insistieron que el nombramiento del Rector es a cargo del arzobispo de Medellín y que el nombramiento de la Junta Directiva obedece a un mero formalismo de la institución.

¹ PDF “011ContestacionDeDemanda”, folios 49

El demandante era un presbítero, adscrito a la diócesis de Medellín, sometido a los votos de obediencia, quien se encontraba subordinado al arzobispo de Medellín, pues así lo reconocen las partes; ambas instituciones educativas fueron creadas por la iglesia católica en ejercicio de su misión pastoral, con una finalidad evangelizadora, según se lee del certificado de existencia y representación; de los Estatutos del Liceo Salazar y Herrera se lee que *“es una institución educativa creada por la Iglesia Católica en el ejercicio de su misión pastoral, como colegio Arquidiocesano pertenece a la Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de la América, con una finalidad evangelizadora, docente y social, la cual cumplirá mediante la educación en los distintos niveles de aprendizaje, orientada a que “se procure la formación integral de la persona humana en orden a su fin último y, simultáneamente al bien común de la sociedad y de la Iglesia de modo que los niños y jóvenes desarrollen armónicamente dotes físicos, morales e intelectuales, adquieran un sentido más perfecto de la responsabilidad, y un uso recto de la libertad y se preparen a participar activamente en la vida social”. Esta constituido entonces, como persona jurídica de derecho canónico, y como tal está sometido, únicamente, a la Jerarquía y Legislación Eclesiástica; y como entidad sin ánimo de lucro con personería jurídica de Derecho Civil, con fundamento en las normas constitucionales concordatarias y legislativas, guarda acatamiento a las disposiciones legales vigentes.”*

Se insiste entonces, los testigos advirtieron que la designación del demandante como Rector era competencia del arzobispo de Medellín por tratarse las instituciones demandadas de bienes de la iglesia; no obstante, que el nombramiento a través de la Junta Directiva era solo un formalismo; añadieron los testigos que, si bien para el cargo de Rector también se podía nombrar un laico, en realidad se nombró al demandante por su calidad de religioso, sacerdote con votos de obediencia. Además, de la prueba documental y testimonial se desprende que en tal cargo se ha venido nombrado, antes y después del nombramiento del demandante, únicamente a religiosos.

A través de acta 010 del 29 de octubre de 2010 el Consejo de Dirección le otorgó al demandante una pensión vitalicia y un reconocimiento pecuniario de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes como muestra de gratitud, humanismo, y reconocimiento por sus 25 años de labores al servicio de la institución en calidad de Rector, añadiendo que dicho cargo fue desempeñado con acierto, liderazgo, honestidad, sentido de pertenencia, dedicación, ética y

entrega. Además, por haber vivenciado el proyecto educativo institucional en su cotidianidad como pastor, maestro y guía de la comunidad pastoral. Pero se debe hacer la salvedad que este reconocimiento pecuniario no fue pagado debido a la declaratoria de ineficacia de esta acta; sin embargo, dicho documento da cuenta que la intención de la institución era exaltar la labor de liderazgo del demandante como pastor.

De la jurisprudencia citada exalta la Corte el voto de pobreza, además, en el caso concreto no se desconoce que el actor recibió beneficios económicos a lo largo de su trayectoria como Rector, pero según la prueba testimonial estos se otorgaron para su subsistencia, lo que permite concluir que por ese solo hecho no pueda considerarse como salario, toda vez que el ánimo del demandante no era recibir una retribución económica a cambio de su labor pastoral. Se insiste, su nombramiento obedeció a su condición de religioso, perteneciente a la arquidiócesis de Medellín, subordinado al deber de obediencia al arzobispo de la misma ciudad. Ello impide tal y como lo señaló la Corte Suprema de Justicia, dotar de naturaleza contractual laboral las actividades educativas que como Rector cumplió dentro de la obra de su propia comunidad religiosa, las cuales, por esos mismos votos, están inspiradas en la voluntad de vínculos de fraternidad, espiritualidad, desprendimiento y entrega, ajenos por completo a los que corresponden al vínculo contractual laboral en donde, se sabe, se encuentra siempre presente un interés personal que se refleja en un activo patrimonial del servidor, una contraprestación económica, siempre con carácter oneroso.

De conformidad con lo dicho, se observa que, si bien el demandante estuvo unido con las demandadas a través de una relación laboral, esta no se dio a través de un contrato de trabajo, ya que se encuentra demostrado que la función desempeñada por monseñor Calle Giraldo obedeció a una actividad misional o pastoral, en la que se prestó un servicio orientado fundamentalmente por la espiritualidad, la fraternidad, inspirado en los votos de obediencia propios de su tarea sacerdotal. Ello se debe a que su nombramiento se dio en virtud de su calidad de religioso, por lo que se concluye que la subordinación que tenía frente al arzobispo de Medellín está ligada indefectiblemente a un hecho ajeno al contrato de trabajo, la cual es la existencia de una profesión religiosa, al deber de obediencia y la sumisión a

los mandatos de la iglesia católica, además de que la misión de monseñor era la de evangelizar a la comunidad cristiana a través de orientación académica.

La prueba testimonial también permite concluir, tal y como se ha venido insistiendo, que la subordinación del demandante era respecto del arzobispo de Medellín y no de las Instituciones Educativas demandadas, pues aquel contaba con autonomía para ejercer su función rectoral, sin desconocer el voto de obediencia a su superior, aunque no se evidencia el fundamento legal o reglamentario que lo facultara a realizar prestamos de dinero con el cobro de intereses. Su nombramiento fue discrecional del arzobispo, por lo que, el nombramiento a través de la Junta Directiva obedece a un formalismo de la institución.

No encuentra esta Sala tacha en lo declarado por los testigos llamados por las demandadas, pues de estos se denota claridad y espontaneidad en los asuntos puntuales que permiten inferir la verdadera relación laboral que rigió a las partes.

Al no haber lugar a condena alguna por reajuste de salarios y prestaciones sociales, se hace innecesario analizar lo relacionado a las sanciones moratorias contempladas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99.3 de la ley 50 de 1990 o al reajuste de los aportes a la seguridad social en pensión en los términos señalados en la apelación.

Se concluye entonces, toda vez que se encuentra demostrado que el demandante cumplió una actividad ligada exclusivamente a su vocación religiosa y no a una de índole laboral que permita predicar la existencia de un contrato de trabajo a la ley de lo dispuesto en los artículos 22 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, la sentencia absolutoria merece ser **CONFIRMADA**.

En lo que tiene que ver con la condena impuesta por costas procesales, nuestra ley procesal ha consagrado en esta materia el criterio objetivo, es decir, que las costas corren en todo caso a cargo del vencido en juicio, sin que sea admisible tener en consideración la conducta asumida por las partes dentro del mismo, es decir, sin considerar si se actuó o no de buena fe, ya que

sólo basta con el hecho de haber resultado vencido en juicio para que se imponga tal condena.

En el presente caso las costas procesales se impusieron a cargo de la parte demandante, la cual, se recuerda, con ocasión del fallecimiento del monseñor Gustavo de Jesús Calle Giraldo, este fue sucedido procesalmente por la joven por su heredera testamentaria María José Agudelo Uribe, por lo que es aceptado que la condena recaiga en esta debido a la representación que ejerce. No es aceptable entonces que la joven aspire a ser beneficiaria de las condenas que sea impongan con este proceso, pero que, a su vez, como sucesora y heredera del demandante, no tenga obligación alguna en caso de no prosperar la demanda.

Asimismo, cabe advertir que la sentencia de segunda instancia no es la etapa procesal para pronunciarse sobre la liquidación de las agencias en derecho, toda vez que el artículo 366 del Código General del Proceso reguló que en materia de costas y agencias en derecho, la liquidación se hará de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, manifestando el mencionado artículo en su numeral 5°, que sólo podrá controvertirse el monto de las agencias en derecho mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la liquidación de costas. Por tal razón se **CONFIRMARÁ** lo manifestado por el juez en este sentido.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir avante la apelación formulada por el demandante, son de su cargo y en favor de la Institución Universitaria Salazar y Herrera y del Liceo Salazar y Herrera. De conformidad con lo regulado en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1'000.000, pagaderos en cuantía de \$500.000 a cada una.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE:

Se **CONFIRMA** la sentencia que se revisa por vía de apelación y consulta de fecha y procedencia conocida.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dejó dicho en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Gustavo de Jesús Calle Giraldo sucedido procesalmente por María José Agudelo Uribe
DEMANDADOS	Institución Universitaria Salazar y Herrera Liceo Salazar y Herrera
VINCULADO	Colpensiones
RADICADO	05-001-31-05- 005-2017-00510
DECISIÓN	Confirma sentencia
MAGISTRADO PONENTE	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/126> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 28 de junio de 2021 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 28 de junio de 2021 a la 5:00 pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO